

## Prólogo

El encuentro de aquel miércoles 19 de agosto de 2015 había sido pactado solo unos días antes por correo electrónico. Los invitados llegaron puntuales a la cita en las oficinas del grupo empresarial de inversión privada PDC, acrónimo de los apellidos Paiz del Carmen. El futuro de Guatemala y sus dieciocho millones de habitantes se discutiría con tranquilidad en una lujosa sala de reuniones.

El comediante Jimmy Morales Cabrera y el ex-militar Édgar Ovalle Maldonado se acomodaron en un extremo de la mesa. Ambos representaban al Frente de Convergencia Nacional (FCN Nación), agrupación política establecida legalmente en 2008 por oficiales retirados del Ejército de Guatemala.

En el otro lado de la mesa se sentaron los anfitriones, seis miembros de la selecta élite empresarial del país cuyas fortunas en conjunto sobrepasan los mil millones de dólares: Carlos Manuel Paiz Andrade, fundador y propietario por más de cuarenta años de la gigantesca cadena de supermercados Paiz, ahora propiedad de Walmart Centroamérica; Fernando

Paiz, exdirector de Walmart Centroamérica y miembro de la directiva de los hoteles Hyatt en Latinoamérica; Sergio Paiz del Carmen, directivo de la financiera Interbanco; José Miguel Torrebiarte Novella, presidente de la mayor cementera de la región, Cementos Progreso; Óscar Emilio Castillo, presidente de la Cámara de Industria, y Paulina Paiz Riera. Vía teleconferencia: Salvador José Paiz del Carmen, presidente de PDC y directivo de Walmart Centroamérica, también formó parte del cónclave, según lo certifican varios testimonios judiciales.

Los participantes del encuentro conocían de antemano el motivo de la reunión. Las elecciones generales de Guatemala se realizarían en septiembre de 2015 y la cúpula empresarial, como sucedía cada cuatro años, necesitaba su “caballito” de batalla para ganar los comicios. El resbaladizo panorama electoral los hizo decidirse por Jimmy Morales, aunque fieles a su estilo de cubrirse las espaldas en todo momento, también decidieron impulsar —con menor fuerza— a otras alternativas políticas. La casa nunca pierde.

Jimmy Morales y Édgar Ovalle expusieron ante los asistentes la popularidad de su candidatura, que crecía día a día en las encuestas gracias a su supuesta independencia política. “La gente nos ve como una opción que no tiene compromisos de ningún tipo con el sector privado, con gobiernos anteriores o con el crimen organizado”, explicaron orgullosos los dos integrantes de FCN Nación.

Los miembros de la élite empresarial, satisfechos con lo que escuchaban, sugirieron apoyar a Morales mediante su habitual estilo, dotándolo de

fondos para una campaña mediática. La fórmula les había funcionado efectivamente en el pasado con otros candidatos que llegaron a la Presidencia, y permitiría consolidar el favoritismo del comediante para los comicios de septiembre.

El candidato y su entorno exhibieron sus dudas sobre el modelo de ayuda ofrecido. “No me den dinero en efectivo porque a estas alturas no tenemos cómo recibir una donación. No podemos manejarlo”, replicó Morales, preocupado por las posibles repercusiones a su figura. “Creo que sería muy mal visto por la gente que quiere votar por mí que, de repente, tenga un gran apoyo mediático o una fuerte campaña”, añadió el comediante, de acuerdo con testimonios judiciales.

La plática fue avanzando hasta que el FCN Nación y los miembros del exclusivo sector privado guatemalteco llegaron a un acuerdo para concretar sus respectivas aspiraciones. Los empresarios apoyarían a la agrupación política con poco más de un millón de dólares para la contratación de diecinueve mil personas como representantes del partido, quienes fungirían como fiscales en las mesas electorales durante los comicios.

La idea cuajó en ambos bandos, aun cuando horas después, en privado, Sergio Paiz del Carmen manifestara su contrariedad por el mecanismo elegido para apoyar al candidato presidencial de FCN Nación. “No me parece tener que hacer las donaciones por fuera. Es increíble que el mismo Morales expresamente nos sugiriera que el aporte no se haga directamente a su partido”, admitió Paiz del Carmen ante sus colegas.

La financiación electoral ilícita –un delito bajo la ley guatemalteca– en favor del FCN Nación se ejecutó sin inconvenientes bajo la supervisión de Rodrigo Arenas Echeverría, operador político de la oligarquía guatemalteca y miembro de una de sus plataformas políticas, el Movimiento Cívico Nacional (MCN) –según confirman documentos y testimonios judiciales.

Arenas se encargó también de reclutar a otros miembros de la reducida élite empresarial guatemalteca, interesados en invertir en el potencialmente nuevo presidente de Guatemala. Rápidamente apostaron por Jimmy Morales los poderosos y multimillonarios empresarios Julio Ramiro Castillo Arévalo, vicepresidente de Banco Industrial, el más grande del país; Felipe Antonio Bosch Gutiérrez, presidente de Corporación Multi Inversiones, propietaria de los restaurantes Pollo Campero entre muchos otros negocios de gran escala; José Andrés Botrán Briz, presidente de uno de los principales ingenios azucareros del país, Santa Ana; José Guillermo Castillo Villacorta, ligado a la principal productora de cerveza de la nación, Cervecería Centroamericana, exministro de Economía y exembajador de Guatemala en Estados Unidos; Fraternal Vila Girón, directivo del ingenio azucarero San Diego; Ramiro Alfaro Samayoa, directivo del ingenio azucarero Pantaleón; Herbert González Hertzsch, directivo del ingenio azucarero Palo Gordo; Mariana Inés Diamand Steinberg de Habie, ligada a Corporación Liztex, empresa líder en fabricación de textiles; Stefano Olivero Ros, abogado cercano a Cementos Progreso –además del

consorcio azucarero— y Olga Méndez López, según testimonios judiciales. El repertorio de prestigiosos apellidos aglutinaba a la “crema y nata” del país.

Trasladar el dinero no significó un problema. Arenas Echeverría, en conjunto con los empresarios y FCN Nación, diseñó un plan para mover los fondos al partido de Jimmy. La maniobra, en teoría, no dejaba rastros visibles.

El operador político de la oligarquía superó cualquier sospecha tras estructurar una serie de movimientos electrónicos, pagos con cheques y facturas para evadir los controles de la ley y ocultar la información al Tribunal Supremo Electoral guatemalteco sobre la financiación de la agrupación de Morales. El dirigente del MCN escudó sus actividades principalmente bajo la figura de una empresa denominada Novaservicios, pero también utilizó alrededor de quince corporaciones vinculadas a las multinacionales de la élite empresarial, las firmas y compañías más grandes del país, las mismas que durante décadas han profesado una supuesta responsabilidad social empresarial, cuando en realidad han sido instrumentos para la dominación económica, política, social y religiosa del Estado.

Es osado culpar a Arenas Echeverría por su ligereza a la hora de manejar el dinero de sus jefes. La historia de Guatemala ha confirmado, una y otra vez, el poder que tienen las familias más acaudaladas, no solo para ejercer influencia política, sino también para mostrar su autoridad en las cortes de justicia. El sistema está estructurado para su conveniencia. Nadie en su sano juicio sería capaz de sindicar a esas acaudaladas familias de algún delito,

aun cuando se tuvieran los mecanismos y evidencias necesarios para comprobar que violaron la ley. Las consecuencias serían catastróficas para el acusador.

Justamente dos semanas después de aquella reunión en las oficinas de PDC, en un hecho sin precedentes en el país, Otto Fernando Pérez Molina renunciaba a la Presidencia de Guatemala, acorralado por un millonario escándalo de corrupción destapado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El general retirado del Ejército, el mismo que la oligarquía había apoyado con fuerza en las elecciones de 2011, pasaba de gobernar el país a una cárcel estatal en solo cuestión de horas.